



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 13 de Septiembre de 2022

Vistos los autos: "Simmons de Argentina S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 22/52 Simmons de Argentina S.A.I.C. inicia acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Córdoba, con el fin de solicitar que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse, frente a la pretensión de la demandada de gravar la actividad que realiza en su jurisdicción con una alícuota diferencial (más alta) para el pago del impuesto sobre los ingresos brutos, por los períodos fiscales 4/2016 a 8/2016, en razón de no poseer su establecimiento productivo en esa provincia.

Puntualmente, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 5° de la ley provincial 9505, 371 de la resolución normativa 1/2011 y 22 de la local ley 10.324 en que se funda la pretensión fiscal plasmada en la resolución DJRGDA-R 59/2016, en cuanto sostiene que resulta violatoria de diversos derechos y garantías constitucionales, en particular de los artículos 4°, 9°, 10, 11, 12, 16, 17, 28, 31, 75, incisos 1, 10 y 13, y 126 de la Constitución Nacional.

Explica que Simmons de Argentina S.A.I.C. es una empresa que tiene como actividad principal la fabricación de "somieres y colchones y productos plásticos en formas básicas y

artículos de plástico". Añade que posee su sede central en la Provincia de San Luis. Asimismo, señala que cuenta con establecimientos en las localidades de Avellaneda y Banfield de la Provincia de Buenos Aires y que, como consecuencia de las actividades que despliega en más de una jurisdicción provincial, es contribuyente bajo el régimen del Convenio Multilateral.

Puntualiza que el día 24 de junio de 2016 la Dirección General de Rentas la intimó para que rectifique la declaración jurada conforme a las alícuotas allí indicadas e ingrese el pago de las diferencias resultantes (v. formulario F-904, fs. 8).

Señala que, posteriormente, fue notificada de la resolución DJRGDA-R 59/2016 de fecha 11 de octubre de 2016, por medio de la cual fue intimada al pago de las sumas resultantes de la aplicación de la alícuota mayor establecida en las normas cuya constitucionalidad impugna (v. fs. 9/12).

En ese contexto, aduce que la pretensión provincial constituye una invasión a las facultades exclusivas de la Nación para reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí (artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional), e instaura una "aduana interior" que vulnera lo prescripto por los artículos 4º, 9º, 10, 75, incisos 1 y 10, y 126 de la Constitución Nacional. Además, alega que los actos y normas cuestionados violan los artículos 16, 17 y 28 de la Carta Magna. Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por último, desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia de la acción declarativa.

II) A fs. 66/67 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa e hizo lugar a la medida cautelar solicitada.

III) A fs. 151 se ordenó el desglose de la contestación de la demanda por haber sido presentada en forma extemporánea.

IV) A fs. 277 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que por remisión a lo dictaminado en la causa "Bayer S.A." (Fallos: 340:1480) propicia la admisión de la demanda.

Considerando:

1º) Que, tal como se decidió a fs. 66/67, esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según lo establecido por los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta, sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de los artículos 5º de la ley provincial 9505, 371 de la resolución normativa 1/2011 y 22 de la ley local 10.324, a la par de fijar relaciones legales que

vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 310:606 y 977; 311:421, entre otros). En efecto, en el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la percepción de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En ese sentido, de la prueba documental agregada a la causa se desprende que la actividad desplegada por la autoridad provincial tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, entre otros).

En consecuencia, es dable concluir que se encuentran reunidos los recaudos exigidos por el artículo 322 del ordenamiento procesal, para la procedencia formal de la acción declarativa.

3º) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias, por cuanto la aplicación de la ley



Corte Suprema de Justicia de la Nación

impositiva 10.324, al gravar la actividad de la actora con la alícuota del 4,75%, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

4°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el presente caso queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduanas interiores" vedada por la Ley Fundamental (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Simmons de Argentina S.A.I.C. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 5° de ley 9505, 371 de la resolución normativa 1/2011 y 22 de la ley 10.324 de la Provincia de Córdoba y de la pretensión fiscal plasmada en la resolución DJRGDA-R 59/2016. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **Simmons de Argentina S.A.I.C.** por medio de sus letrados apoderados, **Dres. Gastón Francisco Vidal Quera y Daniela P. Manesi.**

Parte demandada: **Provincia de Córdoba**, representada por los **Dres. Leticia Valeria Aguirre, Jorge Aita Tagle y Sonia L. Trinidad.**